

En un reciente informe, Amnistía Internacional sostuvo que el gobierno de Modi “reprimió selectiva y ferozmente a las minorías religiosas”, en especial las musulmanas, aunque la persecución se extiende a grupos cristianos.

Las elecciones en India son de vital importancia ya que, a nivel internacional, Modi tiene un rol clave como contrapeso del poder de China, su vecino, en la geopolítica asiática. Y aunque no se ha enfrentado abiertamente con Putin por la invasión a Ucrania, sí lo ha cuestionado. “Este no es el momento de la guerra”, le dijo Modi el año pasado en una cumbre.

En Estados Unidos, en tanto, si oyéramos lo que dicen las encuestas, en las presidenciales del 5 de noviembre, Trump es favorito para derrotar a Biden, quien cada día aparece más desacreditado por sus problemas de salud.

Según el promedio ponderado de sondeos que divulga la plataforma Real Clear Politics, Trump ganaría con 46,8%, contra 44,5 % de Biden. Sin embargo, Trump debe enfrentarse a una carrera de obstáculos judiciales en media docena de complicados procesos, dos civiles y cuatro penales.

Uno de ellos relacionado con el actuar de Trump durante el asalto violento de sus seguidores al Capitolio, el 6 de enero de 2021, quienes buscaban impedir que los congresistas certificaran, como debían, el triunfo de Biden. La Fiscalía acusa al expresidente de conspirar para subvertir el orden democrático, y aparte de los hechos del Capitolio, ha sumado al proceso otros intentos de Trump por cambiar el resultado en varios estados. El juicio está fijado para el 4 de marzo, en pleno arranque del proceso de primarias en las que la participación de Trump está en riesgo.

La Corte Suprema de Colorado resolvió hace pocos días impedir que el nombre del expresidente esté en la papeleta de las primarias republicanas del 5 de marzo, en ese estado. El tribunal se basó en una cláusula de la enmienda 14 de la Constitución, que impide a quien haya estado involucrado en una insurrección, presentarse a las elecciones a un cargo público.

Los abogados de Trump ya recurrieron la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que decidir en este caso y en procesos similares en otros estados, así como resolver recursos de las partes en los distintos procesos contra el exmandatario.

Igualmente, en marzo se esperan los resultados de las elecciones en Rusia, donde Putin tiene asegurada la victoria luego de la muerte, encarcelamiento o exilio de casi todos los líderes opositores.

En otra parte del mundo, Nayib Bukele, aprovechó su popularidad (que sobrepasa el 75 por ciento gracias a su política de guerra sin cuartel contra las bandas criminales, y a un audaz manejo de su comunicación política), y antes de que se reconociera ningún resultado oficial, ya se había declarado ganador en la red social X (antes Twitter). “Hemos ganado las

elecciones presidenciales con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea. El récord en toda la historia democrática del mundo”, dijo.

En México, amplia ventaja lleva la académica Claudia Sheinbaum, de 61 años, hasta hace poco jefe de gobierno de Ciudad de México. Sheinbaum aspira a ganar las elecciones del 2 de junio, y darle así continuidad al proyecto nacionalista de izquierda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Venezuela, la candidata favorita, María Corina Machado, no tiene asegurada su participación. Machado, quien aventaja 50 por ciento a 12 por ciento a Maduro, según una encuesta de Meganálisis, presentó un recurso a la Corte Suprema para que revise la inhabilitación por 15 años que la Contraloría le impuso, en un proceso plagado de arbitrariedades.

Los conflictos

Los golpes más duros de los conflictos en 2024 recaerán probablemente en los países del mundo que ya son los más castigados por la violencia. En 2023, el 97% de toda la violencia política se produjo en 50 países, según la clasificación del Índice de Conflictos de ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project). En 2024 la nueva Lista de Vigilancia de Conflictos que propone sugiere que muchos de estos mismos conflictos -alimentados por la competencia política, las crisis regionales y las disputas civiles- catalizarán más violencia en varios de estos estados.

Según ACLED “El número sin precedentes de elecciones de este año podría ser un motor clave de la violencia nacional y de la propagación internacional en 2024: incluyen las elecciones previstas en México, Estados Unidos y Rusia; resultados electorales impugnados en la República Democrática del Congo; y la toma de posesión de un nuevo gobierno en Haití. Tal vez lo más destacado sea que el resultado de las elecciones generales en Estados Unidos por sí solo podría tener graves efectos en cadena sobre la violencia de los cárteles en México y los conflictos mortales en Ucrania y Palestina (y los Houthis de Yemen por extensión). Las elecciones nacionales y locales en México probablemente catalizarán los ataques de los grupos armados contra figuras relacionadas con las elecciones, elevando los ya extremos niveles de violencia”.

En varias regiones del mundo, las violentas luchas por el poder suponen un desafío a largo plazo para la estabilidad y amenazan a los civiles atrapados en el fuego cruzado. La inseguridad que dura décadas en el Sahel está entrando en una nueva fase, a medida que las fuerzas estatales dirigidas por las juntas recurren a tácticas más agresivas. En Sudán, la toma del poder en Darfur por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) podría prolongar aún más los combates, que ya han desplazado a millones de personas y causado miles de víctimas desde que comenzaron en abril. Mientras tanto, la lucha entre la junta militar y un frente de resistencia desarticulado en Myanmar entra en su tercer año de represión

violenta y ataques contra civiles, pero puede estar en un punto de inflexión a medida que la coordinación entre los grupos de resistencia cobra impulso.

La Lista de Vigilancia de Conflictos de ACLED identifica 10 áreas de crisis que probablemente evolucionen en el próximo año.

- Palestina: Un futuro incierto para Gaza y Cisjordania
- Yemen y el Mar Rojo: El aumento de las tensiones amenaza el proceso de paz y la seguridad internacional
- Sudán: El escenario de una larga guerra
- Sahel: una nueva era mortal en un conflicto que dura décadas
- República Democrática del Congo: El reelegido presidente Tshisekedi se enfrenta a una crisis regional en el este del país
- Ucrania: Un estancamiento mortal sin final a la vista
- Myanmar: La resistencia a la Junta Militar cobra impulso
- Haití: Las bandas y los vigilantes prosperan en medio del estancamiento político
- México: Enfrentarse a luchas mortales por el poder político y criminal en un año electoral
- Estados Unidos: La intensificación de la polarización y las inminentes elecciones presidenciales

Links sugeridos

<https://cenital.com/2024-habra-record-de-paises-con-elecciones/>

<https://www.crisisgroup.org/crisiswatch>

Sahel, una larga cadena de guerra y colonización

Reporte No. 79
Solicita: Jaime Quintana, Senador.
Asesora externa: Carolina Frêne
Febrero 2024

Aunque la región del Sahel es hoy una de las más pobres y frágiles del mundo, en los siglos XI y XII fue testigo de una gran actividad mercantil impulsada por el comercio. El Sahel era un verdadero pivote entre el norte de África y la costa occidental africana. Allí se construyeron varios reinos e imperios: Songhaï, Kanem-Bornou, Mossi y Bambara.

Más tarde, el Estado francés comenzó a colonizar la franja saheliana en el siglo XVIII. La zona, al sur del desierto del Sahara, está formada por varios países, entre ellos Senegal, Burkina Faso, Níger, Malí, Mauritania y Chad. ¿Dónde se encuentra el Sahel?

La palabra Sahel (Es-Sahel) significa "orilla" o "borde" en árabe. Es la zona de transición entre el desierto del Sahara, al norte, y la zona sudanesa, al sur. En sentido amplio incluye 10 países: Burkina Faso, Camerún, Chad, Gambia, Guinea, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal. Pero se trata de una definición amplia del Sahel, ya que también incluye países "tocados" por la franja saheliana al sur (como es el caso de Gambia, Nigeria y Camerún). Hablar de Sahel es centrarse en 6 países principales: Senegal, Malí, Níger, Chad, Burkina Faso y Mauritania. De estos 6 países, 5 se han unido bajo la misma bandera, el G5 Sahel, para liderar la lucha contra el terrorismo en la región (a excepción de Senegal, que no es miembro).

La puerta entre dos Áfricas

El Sahel es un territorio extenso con una franja de 5.500 kilómetros de largo (el tamaño de 5 veces y media Francia) y de 400 a 500 kilómetros de ancho, con una superficie total de unos 3 millones de metros cuadrados. Posee un clima desértico muy variado: de árido a semiárido, pasando por la sabana, es una zona compleja en constante movimiento. La estación seca, que dura de 8 a 9 meses según las regiones, es el ritmo de la vida pastoril sedentaria y nómada, y lleva a los ganaderos a desplazarse con mucha regularidad: fenómeno conocido como trashumancia. Hoy en día, la zona desértica tiende a extenderse cada vez más hacia el sur, lo que plantea una serie de dificultades a las poblaciones, ya que la ocupación de esta zona está globalmente ligada al clima. El 75% de la población de la región vive en zonas húmedas y subhúmedas, el 20% en la zona semiárida (saheliana) y el 5% en zonas áridas

Un potencial humano y natural exponencial

La región tiene abundantes recursos naturales, energéticos y culturales con una población de los 6 países del Sahel (Senegal, Chad, Níger, Malí, Burkina Faso y Mauritania) que podría pasar de 135 millones en 2015 a 330 millones en 2050 si se mantienen las tasas de natalidad actuales.

La región cuenta con población cada vez más joven, donde los menores de 25 años representan casi el 65% de la población total, lo que la convierte en una de las zonas más jóvenes del mundo. Tiene importantes recursos mineros en metales preciosos, gas, etc; fuentes de agua dulce sin explotar, y acceso al mar a través de Mauritania y Senegal.

La zona saheliana contiene algunos de los mayores acuíferos del mundo, sin olvidar el acceso al océano a través de la costa senegalesa. En el sector minero, por ejemplo, el subsuelo de Malí contiene yacimientos de oro, fosfato, sal gema, petróleo, caliza, bauxita, hierro, manganeso, yeso, uranio y mármol.

La presencia de petróleo y metales raros en el subsuelo del Sahel (sobre todo en el norte de Níger y Mali) ha convertido la región en un "polo energético" cada vez más codiciado por las grandes potencias. China, por ejemplo, ha invertido mucho en África y el Sahel en la última década, al igual que varias potencias emergentes.

Crisis humanitaria

Actualmente Sahel es una de las zonas más pobres del mundo debido a una crisis multidimensional. Las profundas desigualdades que separan a ciertas capas de la población alimentan: crisis políticas, de desplazamientos forzosos, humanitarias, económicas, medioambientales, climáticas, alimentarias y de seguridad.

En la actualidad, el 20% de la población saheliana, es decir, 24 millones de personas, necesita ayuda humanitaria de emergencia en términos de refugio, acceso al agua, alimentos y medios de subsistencia, atención sanitaria, educación y protección efectiva y no discriminatoria. Desde la pandemia, las condiciones de vida de los más desfavorecidos se han deteriorado aún más. La población vive con menos de 2 dólares al día.

La controvertida colonización

Varios de estos países de África Occidental fueron colonizados por Francia antes de obtener la independencia (Senegal, Mali, Burkina Faso y Mauritania).

A principios de 2012, grupos yihadistas tomaron varias ciudades del norte de Malí y lograron invadir Kidal, Gao y Tombuctú con el objetivo de derrocar al presidente Amadou Toumani Touré. Ante el grave deterioro de la situación, Francia lanzó la Operación Serval el 11 de enero de 2013, desplegando hasta 5.000 soldados para frenar el avance de los yihadistas en la región. Ese mismo año, se creó una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU), la MINUSMA. En 2014, la operación Serval se convirtió en la operación Barkhane: el mayor despliegue de tropas francesas en una operación extranjera, se enviaron muchos más soldados sobre el terreno y se movilizó una cantidad colosal de material. La operación Barkhane se inscribe en el marco de una asociación con los cinco países del G5 Sahel.

En junio de 2021, el presidente francés Emmanuel Macron anunció una retirada gradual de las tropas francesas, aunque mantuvo una pequeña parte de las fuerzas sobre el terreno, antes de decidir finalmente poner fin a la misma en febrero de 2022. Esta incapacidad para pacificar la zona es

indicativa de una estrategia que, al depender excesivamente de los militares, no ha logrado abordar las causas profundas de la crisis de la región.

En efecto, 9 años después del inicio de la Operación Serval, y a pesar de haberse gastado varios miles de millones de euros en la respuesta militar, la intervención francesa no ha logrado poner fin a la creciente inseguridad en la región. Al contrario, la situación se ha deteriorado: inicialmente confinada a Malí, la inseguridad se ha extendido ahora a Burkina Faso, Níger y Benín, y amenaza a otros países de África Occidental como Costa de Marfil. Tres de estos países han sufrido golpes militares en el espacio de un año, el más reciente de los cuales tuvo lugar en Burkina Faso en septiembre de 2022. La percepción compartida por un gran número de actores es que la intervención militar está desfasada, carece de visión estratégica y está fuera de contacto con el terreno.

Antes de la colonización, las poblaciones sedentarias de las riberas y sus regiones expuestas estaban en manos de los tuareg al norte y los peul al sur. A finales del siglo XIX, la colonización del ejército francés bloqueó la expansión de estas entidades nómadas depredadoras, poniendo fin a una historia de explotación, masacres y venta de esclavos al mundo árabe-musulmán, base de la estructura y el comercio. A finales del siglo XIX, las sociedades sahel-saharianas eran sociedades esclavistas, organizadas económica y políticamente en torno a la esclavitud.

Sin embargo, la colonización invirtió el equilibrio de poder local ofreciendo venganza a las víctimas y agrupando a víctimas y victimarios dentro de los límites administrativos del AOF (África Occidental Francesa). Con la independencia, los límites administrativos de esta vasta entidad se convirtieron en fronteras estatales, dentro de las cuales, al ser la más numerosa, la población sedentaria prevaleció políticamente sobre los nómadas.

Pero mientras que en estas sociedades todo el mundo sabía quién era esclavo y quién no, por su forma de andar, hablar, vestir o sentarse, los soldados franceses eran incapaces de identificar a sus interlocutores. Esta incapacidad, pero también su indiferencia al respecto, iba a tener efectos importantes. Cuando los esclavos, y en particular los esclavos de la corte y los eunucos, se dieron cuenta de que su palabra era ahora tenida en cuenta por los franceses del mismo modo que la de un hombre libre, o incluso la del sultán, cambiaron los parámetros de la situación.

Muchos de ellos optaron entonces por volverse contra su amo, poniéndose del lado de los colonizadores franceses. Así pues, si los militares coloniales lograron hacerse con el poder, no fue sólo por su fuerza o sus acciones, sino también por las profundas divisiones de estas sociedades y, en particular, por el fuerte resentimiento de las poblaciones hacia las potencias y, en particular, hacia los esclavos y esclavas de la corte.

Hoy en día, las cuestiones de jerarquía social y el legado de la esclavitud siguen siendo temas importantes en las sociedades del Sáhara y del Sahel central, pero el carácter tácito de estas cuestiones impide a veces medir su alcance.

Para el politólogo francés, Jean-François Bayart, no debemos confundirnos cuando buscamos comprender las verdaderas causas del yihadismo. Bayart señala que el ámbito de acción y legitimidad de los movimientos armados en el Sahel es nacional, cuando no local, siendo su yihadismo el síntoma

de una crisis política -la no integración de las regiones periféricas o de las poblaciones desfavorecidas, en particular las de origen servil, en las instituciones del Estado- y de una crisis agraria.

Diversos factores de carácter secular han agravado esta crisis desde la independencia: la presión demográfica; las grandes sequías de los años 70 y 80, que provocaron la reducción de varios centenares de kilómetros de las rutas de trashumancia; el acaparamiento y la titulización de tierras en beneficio de la clase dominante y de las empresas mineras extranjeras, que complicaron las relaciones entre agricultores y pastores y provocaron la expulsión de parte del campesinado de sus tierras; la liberalización de los sectores agrícolas, que intensificó el éxodo rural y empobreció a la población; la reducción de la ayuda oficial al desarrollo; el cierre de las fronteras europeas, que secó el flujo de remesas; los programas de ajuste estructural de los años ochenta y noventa, que destruyeron la educación y la sanidad públicas y abrieron el camino a los actores islámicos del Golfo; y la desastrosa intervención militar de Francia, Reino Unido y Estados Unidos en Libia en 2011, cuyas réplicas aún se dejan sentir al sur del Sáhara.

¿El comienzo de una revolución agraria?

Desde este punto de vista, Bayart insiste en que los yihadistas sahelianos son bastante comparables a los talibanes de Afganistán, que han construido así una verdadera base social. Incluso cabe preguntarse si no están dirigiendo una especie de revolución agraria, por ejemplo en Malí, en el país Dogon, según el principio de que la tierra sólo pertenece a Dios.

Reconocer esto no es en absoluto justificar los excesos de los yihadistas ni minimizar el rechazo del que son objeto por una gran parte de los habitantes del Sahel. Simplemente significa reconocer la naturaleza política y social de su lucha e identificar la principal cuestión en juego: la tierra. También significa recordar que el yihadismo contemporáneo en el Sahel forma parte de una larga historia en África Occidental. En el siglo XIX, configuró la formación de los Estados y los movimientos de reforma religiosa, moral y política que moldearon las relaciones entre órdenes sociales -en particular entre hombres libres y esclavos-, entre pueblos y entre géneros. La propia colonización se incrustó en esta historia local de terruños, sin comprender su entramado.

En Francia, el reparto de la propiedad de la tierra es una herencia directa de la Revolución. En el Sahel, es en parte un legado de las yihads del siglo XIX, así como de la colonización, y los contemporáneos tienen una aguda conciencia histórica de ello. Del mismo modo, hay que relativizar la oposición binaria entre agricultores sedentarios y ganaderos nómadas. Muchos nómadas poseen tierras y propiedades en Bamako. Muchos agricultores tienen ganado que confían a pastores nómadas.

En resumen, el yihadismo contemporáneo da forma político-religiosa a los conflictos agrarios, resonando en la conciencia histórica de la región. También está tomando el control de las rutas comerciales, siguiendo el ejemplo de Boko Haram en las fronteras de Camerún, Chad y Níger. Es un síntoma de la distorsión e inequidad del Estado colonial, que las clases dominantes han reproducido a costa de un agravamiento de las desigualdades y de una crisis de representación política.

G20, nuevas formas de gobernanza en medio de un mundo en conflicto

Reporte No. 80
Solicita: Jaime Quintana, Senador.
Asesora externa: Carolina Frêne
Febrero 2024

El 1 de diciembre de 2023 Brasil asumió la presidencia rotativa del G20, la cual mantendrá hasta el 30 de noviembre de 2024, periodo en el cual se celebrarán alrededor de 130 reuniones en 15 ciudades de todo el país. Entre estas reuniones, la más importante será la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20, prevista para los días 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro.

Se ha anunciado que los debates a lo largo del año se estructurarán en torno a tres prioridades: potenciar la inclusión social y combatir el hambre y la pobreza; promover el desarrollo sostenible, centrándose en sus tres pilares: aspectos sociales, económicos y medioambientales; y reformar las instituciones de gobernanza mundial.

La antesala de estos encuentros fue la primera reunión de alto nivel recién celebrada en Brasil el 21 de febrero, donde los anfitriones criticaron lo que llamaron "parálisis" del Consejo de Seguridad de la ONU en las guerras de Gaza y Ucrania, quedando de manifiesto las profundas divisiones de la comunidad internacional en esta y otras materias.

En la apertura de la reunión de dos días, en la que participaron el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el principal diplomático brasileño, Mauro Vieira, afirmó que la explosión de conflictos mundiales demuestra que instituciones internacionales como las Naciones Unidas no funcionan.

"Las instituciones multilaterales no están debidamente equipadas para hacer frente a los desafíos actuales, como ha demostrado la inaceptable parálisis del Consejo de Seguridad en los conflictos en curso" en Gaza y Ucrania, dijo Vieira, añadiendo que la situación estaba costando "vidas inocentes". Por su parte, el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, advirtió de que el multilateralismo "está en crisis".

El Consejo de Seguridad no ha actuado ante la invasión rusa de Ucrania, frenada por el poder de veto ruso, y ha tenido problemas para encontrar una respuesta a la guerra en Gaza, con Estados Unidos, aliado de Israel, utilizando su veto para bloquear los llamamientos a un alto el fuego, el último el martes.

Las esperanzas de progresar encontraron un muro una vez que el mandatario brasileño, Lula da Silva, provocó una tormenta diplomática acusando a Israel de "genocidio" y comparando su campaña militar en la Franja de Gaza con el Holocausto.

Los comentarios provocaron, como era de esperar, la indignación de Israel, que lo declaró persona non grata y podría ensombrecer cualquier intento de desescalar el conflicto a través del G20.

Blinken, que se reunió con Lula el miércoles en Brasilia antes de dirigirse al G20, según dijo a los periodistas un alto funcionario del Departamento de Estado "dejó claro que no estamos de acuerdo con (sus) comentarios". En su reunión con Lula, Blinken se mostró pesimista sobre las posibilidades actuales de diplomacia en Ucrania. "No vemos las condiciones para ello en este momento", dijo un funcionario estadounidense.

Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, dijo que planeaba utilizar la reunión de Río para "llamar la atención sobre la agresión de Rusia" directamente a Lavrov, mientras Gran Bretaña anunció sanciones a seis funcionarios rusos por la muerte en prisión del líder de la oposición Alexei Navalny la semana pasada.

Lavrov -que se reunirá con Lula en Brasilia el jueves, según un funcionario brasileño- arremetió mientras tanto contra Occidente por "bombear a Ucrania con armas". "Ni Kiev ni Occidente han mostrado voluntad política para resolver el conflicto", declaró al diario brasileño O Globo.

India y Brasil, agenda de continuidad

Brasil e India, en cuyos hombros recayó la presidencia anterior del G20, comparten puntos de vista sobre cuestiones mundiales clave. Por primera vez desde su creación en 1999, el Grupo de los Veinte (G20) tendrá cuatro presidencias consecutivas de economías emergentes (Indonesia en 2022, India en 2023, Brasil este año y Sudáfrica en 2025). Cuando los ministros de Asuntos Exteriores del G20 inicien su reunión en Río de Janeiro el miércoles, cabe esperar que los puntos de vista compartidos por India y Brasil se reflejen en un alto grado de continuidad entre sus agendas del G20.

Los miembros del G20 representan colectivamente más del 80% del producto interior bruto mundial, $\frac{3}{4}$ partes del comercio mundial y $\frac{2}{3}$ de la población mundial. Además, el foro sigue siendo la principal plataforma mundial para coordinar la política internacional. A lo largo del próximo año, la programación e investigación del G20 del Atlantic Council hará un seguimiento de cómo Brasil lidera este grupo a la hora de abordar cuatro áreas clave (presentadas a continuación) y trabajará para promover la continuidad con la presidencia de Sudáfrica en 2025 y la de Estados Unidos en 2026.

Seguridad alimentaria y eliminación del hambre

Quizá ninguna necesidad destaque de forma tan urgente y generalizada como la inseguridad alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos, 783 millones de personas en todo el mundo padecerán hambre crónica en 2023, y la mayoría se encuentran en mercados emergentes y economías en desarrollo. El Presidente brasileño ha redoblado sus esfuerzos en la dimensión social del desarrollo, centrándose en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el hambre. Brasil es el segundo exportador mundial de productos agrícolas y ocupa un lugar central en las cadenas de suministro mundiales, en particular en las de los mercados emergentes y las economías en desarrollo.

Financiación para el clima y el desarrollo

En materia de clima y financiación sostenible, la Presidencia brasileña del G20 parece dispuesta a aprovechar el legado de la Presidencia india, ofreciendo al mismo tiempo notables

innovaciones y adaptaciones. Las cuatro prioridades del Grupo de Trabajo sobre Finanzas Sostenibles de 2024 son ilustrativas de los intereses particulares de Brasil y del mandato general de este G20 de “Construir un mundo justo y un planeta sostenible”. Por ejemplo, los instrumentos financieros para soluciones basadas en la naturaleza están recibiendo, con razón, más atención que nunca en Brasil, lo que no debería sorprender en un país que contiene “dos tercios de la selva amazónica y entre el 15% y el 20% de la biodiversidad mundial.

Infraestructura pública digital

Otra área de continuidad y compatibilidad entre las presidencias del G20 de India y Brasil es la provisión de infraestructura pública digital a través de pagos, identidad y otras redes digitales creadas por el Estado para digitalizar y mejorar la provisión de servicios públicos. A través de Pix de Brasil y de la Interfaz Unificada de Pagos (UPI) de India, por ejemplo, ambos países han cosechado un enorme éxito en la creación de ecosistemas de pagos digitales y en el aumento de la conectividad digital y financiera.

A través del grupo de trabajo sobre pagos, los Estados miembros del G20 fijan objetivos de modernización de los pagos para los bancos centrales y las instituciones multilaterales. Estos objetivos abordan el coste, la transparencia y la velocidad de los pagos mundiales. En 2023, el coste de los pagos minoristas a empresas y particulares en todos los países superó el objetivo del 3% establecido previamente en una cuarta parte de las jurisdicciones de todo el mundo. Del mismo modo, el coste medio de las remesas es más del doble del objetivo del 3%. Estas métricas sirven de referencia para el progreso del G20 y establecen las acciones que los Estados miembros aún deben emprender para alcanzar estos objetivos en 2027 (para los pagos transfronterizos al por menor) y 2030 (para las remesas).

Tanto India como Brasil se posicionan como líderes entre los mercados emergentes en la provisión de infraestructuras públicas digitales, y el G20 proporciona una plataforma para mostrar sus modelos de pago e identidad digitales al resto del mundo. Aunque ambos países ven la adopción de estas plataformas como un mecanismo para aumentar la inclusión financiera y la democratización digital, la adopción más amplia de la infraestructura pública digital también presentará retos. El G20 tendrá que unirse para proporcionar marcos sólidos sobre privacidad de datos, protección del consumidor, ciberseguridad, competencia y colaboración público-privada.

Haití, la vida en medio del caos

Reporte No. 81
Solicita: Jaime Quintana, Senador.
Asesora externa: Carolina Frêne
Febrero 2024

Las noticias que llegan desde Haití son lapidarias, el país vive una pesadilla de violencia que las inestables autoridades han sido incapaces de afrontar. La capital es una caja de Pandora en la que las pandillas y los grupos armados mantienen una guerra sin tregua por el control territorial. Todo ello en un contexto de la asfixiante miseria en la que viven millones de personas, y que ha forzado el desplazamiento interno de cientos de miles de haitianos y un éxodo multitudinario de migrantes que dejan el país en busca de mejores condiciones.

El Gobierno en una crisis de inestabilidad perpetua, no muestra la capacidad de enfrentar la grave situación que sufre el país y garantizar el bienestar y seguridad de su población. Incluso el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha lanzado un desesperado grito de auxilio para “salvar” a Haití de la ola de violencia que sufre. “Evitemos que Haití termine arrasado por el caos y la anarquía, no permitamos que la crisis que allí se vive se expanda por toda la región”, exigió el mandatario tras una intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, a mediados de febrero de este año. Abinader lanzó también una advertencia: “Nuestra consigna de hoy en adelante será: ¡O luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solos para proteger a República Dominicana!”

Según el reporte emanado desde Human Rights Watch del año recién pasado, la situación en Haití ha sido descrita como una crisis marcada por la violencia, la impunidad y la corrupción, lo que también ha sido señalado en informes de la ONU. Los informes señalan un aumento alarmante de secuestros de menores y mujeres en 2023, con alrededor de 300 casos en el primer semestre del año. Los grupos armados controlan aproximadamente el 80% de Puerto Príncipe, la capital, lo que ha llevado a llamados tanto del Secretario General de las Naciones Unidas como del Primer Ministro haitiano a una intervención internacional. En octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el envío de una fuerza multinacional a Haití, liderada por Kenia, en respuesta a la situación crítica.

Según la misma fuente, más del 40% de la población de Haití sufre inseguridad alimentaria aguda. El acceso a la electricidad, el agua potable, el saneamiento, la atención sanitaria y la educación son muy limitados. El contexto migratorio mundial tampoco facilita los desplazamientos y a pesar de las terribles condiciones del país, los gobiernos extranjeros devolvieron a Haití a más de 100.000 personas entre enero y agosto; siendo su vecina República Dominicana la responsable del 94% de los retornos.

Crisis política

En Julio de 2021, después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, el primer ministro Henry quien no tiene mandato constitucional, gobierna por decreto. El Parlamento no sesiona desde 2019, cuando el presidente Moïse se negó a organizar elecciones legislativas. Desde enero de 2023, el país carece de cargos electos nacionales.

En junio de 2023, Henry y los líderes políticos y cívicos haitianos se reunieron en Jamaica para buscar una solución política que no llegó y la incertidumbre sigue haciendo lo suyo al tiempo que el sistema de justicia penal está plagado de inseguridad, corrupción, huelgas e influencias políticas. Grupos delictivos han tomado algunos edificios judiciales, entre ellos el Tribunal de Paix de Cité Soleil en julio de 2020 y el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, el principal complejo judicial del país, en julio de 2022. Al parecer, han robado o destruido pruebas y expedientes que pueden ser imposibles de recuperar, ya que los tribunales haitianos no disponen de copias digitales de los expedientes. Los tribunales no han sido reubicados.

En febrero de 2023, el primer ministro Henry nombró a ocho jueces para la Cour de Cassation, el Tribunal Supremo de Haití, para que pudiera funcionar tras más de un año en el que no contó con suficientes jueces para formar quórum. Grupos de la sociedad civil argumentaron que Henry no respetó el procedimiento constitucional para estos nombramientos.

En septiembre, las cárceles de Haití tenían más del triple de su capacidad de reclusos. La mayoría de los 11.784 detenidos -el 84% de los cuales estaban en espera de juicio- vivían en condiciones inhumanas, sin acceso a alimentos, agua o atención médica adecuados. De enero a septiembre murieron 128 detenidos, la mayoría por enfermedades relacionadas con la desnutrición.

Violencia delictiva

Las agencias de la ONU estiman que, en septiembre, más de 300 grupos delictivos controlaban el 80% de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Muchos de ellos están presuntamente vinculados a las élites políticas y económicas, así como a agentes de policía. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) registró el asesinato de 3.156 personas -entre ellas 36 agentes de policía- y 1.284 secuestros a manos de estos grupos entre enero y septiembre de 2023.

Los grupos delictivos siguieron utilizando la violencia sexual para aterrorizar a la población y demostrar su control. Médicos Sin Fronteras (MSF) informó de que había asistido a 1.005 supervivientes de violencia sexual en sus hospitales de Puerto Príncipe entre enero y mayo de 2023, casi el doble que en el mismo periodo de 2022.

Human Rights Watch documentó abusos cometidos por grupos delictivos en cuatro comunas del área metropolitana de Puerto Príncipe, incluido el asesinato de 67 personas -entre ellas 11 niños y 12 mujeres- y la violación de 23 niñas y mujeres. Las supervivientes contaron a Human Rights Watch que las arrastraban por la calle, las violaban en grupo y las obligaban a ver cómo mataban a la gente a machetazos y disparos.

La OACDH documentó docenas de ataques sexuales contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) cometidos por pandilleros entre enero y junio de 2022. Las mujeres víctimas dijeron que los grupos delictivos las habían sometido a "violaciones correctivas" para "curarlas".

A menudo en connivencia con la policía, el movimiento de justicia parapolicial Bwa Kale habría matado a más de 420 personas sospechosas de pertenecer a grupos delictivos entre enero y septiembre, informó el ACNUDH. Human Rights Watch verificó material publicado en redes sociales y sitios de noticias que confirmaba cuatro ataques en marzo y abril, tres de los cuales tuvieron lugar en las inmediaciones de comisarías de policía.

Los grupos criminales han formado su propio movimiento en represalia, Zam Pale. El secretario general de la ONU advirtió en julio que los movimientos Bwa Kale y Zam Kale han "desencadenado un nuevo y alarmante ciclo de violencia" que podría conducir a un mayor reclutamiento de menores.

En tanto, la policía mató a 407 personas entre enero y septiembre, según la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), según la cual los fiscales de Les Cayes y Miragoâne habrían participado en 7 ejecuciones extrajudiciales, e individuos vestidos con uniformes policiales ejecutaron al menos a 18 personas en Tabarre. Ello resultó en que la oficina de asuntos internos de la policía abrió casos de presuntas violaciones de derechos humanos contra 103 agentes entre enero y septiembre.

Derechos económicos y sociales

Según el Banco Mundial, alrededor del 59% de los 11,5 millones de habitantes de Haití vivían con menos de 3,65 dólares al día en 2023. Alrededor de 5,2 millones necesitaban ayuda alimentaria y refugio, un aumento del 20% respecto a 2022; de ellos, 4,9 millones sufrían inseguridad alimentaria aguda. A principios de 2023, sólo un tercio de los haitianos tenía acceso a la electricidad, pero sólo de forma intermitente y a precios elevados. Sólo el 55% de los hogares haitianos tenía acceso a agua potable y dos tercios de la población disponía de servicios de saneamiento limitados o inexistentes, lo que agravaba la propagación del cólera.

En agosto, la Organización Panamericana de la Salud había notificado 58.230 casos sospechosos de cólera, 3.696 casos confirmados y 823 muertes desde el inicio del brote en octubre de 2022. Las organizaciones internacionales estiman que el 75% de las instalaciones sanitarias del país carecen de suministros médicos adecuados y de personal capacitado suficiente. La inseguridad ha provocado un éxodo de trabajadores sanitarios de Haití en los últimos años.

Casi la mitad de los haitianos mayores de 15 años son analfabetos; en 2020, sólo el 46% de los niños terminó la escuela primaria. La calidad y la disponibilidad de la educación pública son generalmente deficientes, y el 85% de las escuelas primarias y aún más de las secundarias eran privadas en 2020. Los elevados costes, los ataques a las escuelas y a los niños en el camino, y la falta de infraestructuras y personal han privado a 4,2 millones de niños de su derecho a la educación, informó UNICEF.

Desplazamiento interno y migración

Casi 195.000 haitianos fueron desplazados internamente por la violencia desde enero de 2022 hasta julio de 2023, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Muchos otros abandonaron el país, a menudo en viajes peligrosos.

La OIM informó de que, de enero a agosto de 2023, los gobiernos extranjeros devolvieron a 103.706 personas a pesar del riesgo que corrían sus vidas y su integridad física en Haití y de los llamamientos de la ONU para detener los retornos forzosos allí. La República Dominicana fue responsable del 94% de los retornos; Estados Unidos, Bahamas, Turcas y Caicos y Cuba fueron responsables de la mayor parte del resto. En abril, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su honda preocupación por el aumento de la incitación al odio y la violencia racista o xenófoba contra haitianos en el extranjero, así como por el uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas del orden en algunos países de América.

En octubre de 2022, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó sanciones -incluidas la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas- contra dirigentes de grupos delictivos y otras personas implicadas en la violencia. En marzo de 2023, los gobiernos extranjeros habían sancionado a 25 personas. En julio, la UE estableció su propio régimen de sanciones contra Haití. En octubre, el Consejo renovó las medidas sancionadoras por un año y amplió el embargo de armas, prohibiendo toda venta o transferencia de armas por parte de países extranjeros a Haití en su conjunto, excepto a la misión autorizada por la ONU y a las fuerzas del orden.

Links sugeridos

<https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/haiti>